

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Exp.018-2019-00583-01  
018-2019-00583-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver los recursos de apelación interpuestos por la RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS S.A. en liquidación judicial, frente al auto que dio por no contestada la demanda, y posteriormente el que dispuso conceder una medida cautelar dentro del proceso ordinario laboral adelantado por ALBERTO FERNEY OSORIO RÚA en su contra.

#### ANTECEDENTES:

El demandante puso en marcha este proceso, con el fin de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo que derive en el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales no reconocidas, la sanción moratoria del artículo 65 del CST y la indemnización por despido sin justa causa.

El Juzgado de Conocimiento, que lo es el Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, admitió la demanda por auto del 17 de octubre de 2019 (Págs. 139-140 Archivo 01) ordenando la notificación a cargo de la activa, procediendo el demandante por medio de su representante judicial con lo pertinente, primero, acorde a las prerrogativas dispuestas en el artículo 41 del CPTSS en coherencia con lo dispuesto en los artículos 291 y ss. del

CGP y luego, a partir de los criterios al respecto estipulados por el Decreto 806 de 2020 que estaba vigente en su momento, se hizo el envío digital el 27 de enero de 2021 (archivo 03).

Redetrans S.A. en liquidación dio respuesta al líbelo el 15 de febrero de 2021, la que el despacho judicial dio por no contestada por auto del 29 de abril de 2021 (archivo 06) en tanto consideró que tal escrito se arribó de manera extemporánea.

La parte afectada interpuso recurso de apelación ante esa determinación (archivo 07), advirtiendo que dadas las condiciones de la entrega del mensaje de datos el 27 de enero de 2021, la contabilización de los términos en virtud de lo que dispone el Decreto 806 de 2020 da lugar a que el vencimiento se presentara el 15 de febrero de 2021, fecha misma en la que fue radicado el escrito de oposición.

Estando sin resolver tal solicitud, la activa allegó memorial pretendiendo como medida cautelar que se ordene la reserva del registro del crédito ante el liquidador teniendo en cuenta la apertura del proceso de liquidación judicial ordenado por la Superintendencia de Sociedades registrada el 15 de diciembre de 2020 con sustento en los artículos 229, 245 y 247 del Código de Comercio.

En ese orden, la *a quo* decidió por auto del 18 de agosto de 2022 (archivo 12) conceder el recurso de apelación interpuesto por la pasiva en el efecto devolutivo y decidió zanjar lo pedido sobre la medida cautelar en audiencia pública que sería celebrada el 19 de octubre de 2022, oportunidad en la que fue concedida en los términos solicitados conforme a lo preceptuado en el artículo 245 del Código de Comercio, ordenando al liquidador realizar la reserva adecuada para atender el litigio en caso de salir adelante las pretensiones, además de disponer la inscripción de la demanda en la Cámara de Comercio donde estuviere registrada la sociedad (archivo 20).

Tal decisión fue atacada también por la convocada, aduciendo que la parte demandante aportó la documental de donde se desprende el acto de graduación y calificación de créditos en virtud de la liquidación judicial por la que atraviesa la sociedad, además del Certificado de Existencia y Representación Legal que registra el estado de insolvencia desde el año 2018, circunstancias que dan certeza sobre la improcedencia de la medida en tanto ello da lugar al desconocimiento del contenido de la Ley 1116 de 2006, específicamente su artículo 48 numeral 5°, donde se impide que dentro de un proceso ordinario sea desconocido tal proceso de insolvencia y se subsanen yerros del solicitante, añadiendo que la provisión contable no está sujeta a debate judicial sino que ello es una carga del liquidador cuando existen contingencias que según la prelación de créditos tienen vocación de pago dentro del proceso de liquidación, créditos que debieron ser presentados dentro de los 20 días a realizado el aviso de la liquidación, sin que sea posible que se adicionen términos extemporáneos en favor del demandante, quien por demás quedó incluido en la calificación surtida dentro del proceso de insolvencia. En esa medida, solicitó la revocatoria de lo decidido para que en su lugar fuera denegada la medida cautelar pedida.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que los autos atacados se encuentran previstos en los numerales 1° y 7° del artículo 65 del CPTSS, según los cuales son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que den por no contestada la demanda y que decidan sobre medidas cautelares.

A partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar en primera medida si debe revocarse la determinación de la *a quo* que dio por

no contestada la demanda de parte de Redetrans S.A. en liquidación judicial por aportarse el escrito en término, y en un segundo momento, habrá de analizarse si la medida cautelar decretada resulta pertinente de cara al proceso de liquidación judicial al que la sociedad ha estado sometida con acogimiento a lo que tiene establecido la Ley 1116 de 2006.

Pues bien, para definir la primera de las cuestiones se tiene que el Decreto 860 de 2020 con miras a garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, defensa y seguridad jurídica de las partes, atendiendo la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica de parte del Gobierno Nacional por el brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19, impuso la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones determinando en su artículo 8° la manera en que se gestionarían las notificaciones personales, disposición que en su tenor literal establecía:

*“Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

*El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*

*La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.*

*Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*

*Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá*

*manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.”*

Con base a tal normativa, el actor remitió al mail de notificación de la convocada a través del servicio digital de Servientrega, el escrito de demanda con sus anexos, además de la actuación que dio impulso al trámite, el 27 de enero de 2021 (Pág.3 Archivo 03), dato simple a partir del cual la extemporaneidad afirmada por la Juez tendría cabida ya que los tiempos enseñarían como fecha límite para radicar la respuesta el 12 de febrero de 2021; sin embargo, no es posible ignorar que ese envío según lo revela la respectiva constancia ocurrió a la hora 19:42, lo que da cuenta que atendiendo el horario hábil dispuesto para ese efecto procesal, el direccionamiento debe entenderse surtido realmente al día siguiente 28 de enero de 2021, notificación que se concretó dentro de los dos días hábiles siguientes, esto es, el 01 de febrero de 2021, desde cuando empezó a correr el término de diez días dispuesto por el artículo 74 del CPTSS, el que venció el 15 de febrero de 2021, fecha misma en la que la demandada arribó el escrito de contestación (Archivo 05), conjeturas que permiten dar razón a la apelante en este aspecto y que da paso a que el auto emitido el 29 de abril de 2021 sea revocado en cuanto dio por no contestada la demanda, para en su lugar, disponer que el escrito debe ser incluido en la foliatura para su valoración y estudio.

Ahora, para resolver el segundo de los disensos, se tiene que el inicio de un proceso de liquidación de una sociedad por parte de la Superintendencia de Sociedades, trae como consecuencia varios efectos jurídicos procesales en torno de la sociedad como de los acreedores, sus activos, sus pasivos y su patrimonio.

Debe tenerse en cuenta que en la providencia por medio de la cual el juez del concurso decreta la liquidación judicial de una sociedad, ordena entre otras medidas, el que dicha providencia debe ser inscrita en el Certificado de Cámara de Comercio del domicilio del deudor, como en el de sus

sucursales, y se promueve la fijación de un aviso en el que se informe a los acreedores acerca de la expedición de la providencia de inicio del proceso de liquidación judicial, ello en los términos dispuestos en los numerales 4, 5, y 7 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, con lo cual se permite a todos los interesados verificar en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad el tipo de proceso concursal que tramita, que en este caso, está referido al proceso de liquidación judicial, a efectos de que los acreedores emprendan las acciones de reconocimiento de sus créditos ante dicho proceso, conforme las etapas procesales previstas en el régimen concursal para tal efecto.

Lo anterior está a tono con lo dispuesto por el numeral 5° del mencionado artículo 48 en el que se estipuló un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de su existencia y la cuantía del mismo, señalando a su turno, que cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de liquidación judicial, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Ya los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los derivados de gastos de administración, deberán ser presentados al liquidador, lo que quiere decir que los acreedores laborales que hayan iniciado procesos litigiosos de carácter declarativo debidamente admitidos ante los jueces ordinarios, en contra de la sociedad que fue admitida a un proceso de liquidación judicial, deberán hacerse parte en el proceso de liquidación judicial que se tramita ante la entidad, eso sí, acreditando la existencia de tales procesos en los términos antes mencionados.

El agotamiento de esa gestión es esencial ya que de ese modo se solicita al juez del concurso y al liquidador la constitución de la provisión y reserva

contable del caso, conforme a la disponibilidad de los activos y el orden de prelación legal de los créditos dentro del proceso concursal, para que sea atendidas las resultas de los procesos declarativos mediante sentencia debidamente ejecutoriada que declara responsable a la sociedad concursada, pues de lo contrario, si los acreedores litigiosos, se abstienen de estar atentos al desarrollo del proceso concursal correspondiente en defensa de sus derechos no habrá de ser posible garantizar el pago de lo que se defina en la sentencia por no haber estados reconocidos esos créditos en la calificación y graduación de los mismos.

Lo anterior quiere decir que así como el proceso de liquidación judicial de una sociedad se termina en los términos del 63 de la ley 1116 de 2006, sin que esté supeditado a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso de cualquier naturaleza, también lo es que el mismo continuará una vez agotada cada etapa y tiempo destinado para lo respectivo, sin que sea posible admitir que en cualquier momento de su desarrollo los acreedores litigiosos acudan a hacer valer sus créditos con suspensión del proceso de forma indefinida, pues incluso, sin adelantamiento de una acción judicial, pueden hacerse parte dentro del proceso de liquidación judicial para reclamar sus derechos, aportando los correspondientes soportes claros, expresos y exigibles.

Así, contándose con un medio legal para asegurar la deuda aun sin definición del proceso declarativo, no es posible pretermir el procedimiento reglado para dar cabida a lo que se ordenó por la abstención de la carga procesal que al actor le asistía, pues lo que revela la prueba misma con la que la activa sustenta la solicitud, es que el proceso de liquidación de la sociedad enjuiciada fue aperturado desde el 30 de julio de 2020, por lo que siendo inscrito en el correspondiente registro desde el 15 de diciembre de 2020 (Pág. 5 archivo 17), cuando ya cursaba este litigio, el demandante contaba con los términos ya referenciados para presentar la demanda ante la autoridad competente sin que acorde al escenario planteado lo haya hecho, sin perjuicio de que como la liquidación judicial se derivó del proceso

de reorganización, la inclusión de los créditos del actor allí presentados quedaran inmersos en el trámite, por lo que no es posible insertar nuevas cifras o adeudos para registrar en la rendición final de cuentas, por considerar el interesado que no se trató de una reserva adecuada para atender las obligaciones de este proceso como fue indicado en el escrito de solicitud de la medida (Archivo 10).

A partir de lo anterior, si bien asiste razón a la *a quo* en cuanto a la postura adoptada proveniente de la Corte Constitucional - C043-2021 - donde se acogió la posibilidad de aplicar analógicamente las medidas cautelares innominadas del proceso civil en el laboral, con lo que se adujo que el legislador responde a la variedad de circunstancias que se pueden presentar en el proceso, y por tanto, resultan idóneas y eficaces para prevenir daños y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores en sus distintas dimensiones, no es en el caso que nos ocupa procedente, por estar sujeto el proceso judicial a las prerrogativas dispuestas por la Ley 1116 de 2006, sin que sea viable que por medio de este trámite ordinario se consienta la presentación de los créditos de manera extemporánea, siendo que desde el 31 de agosto de 2021 el proyecto de graduación y calificación de créditos se encuentra aprobado (Archivo 18).

Es de este modo que se considera por la Sala que no existen argumentos fácticos o jurídicos atendibles para dar cabida a la medida cautelar pedida, lo que conlleva a que en este aspecto se revoque la decisión emitida el 19 de octubre de 2022.

Siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, por la prosperidad de las alzas en esta instancia no se causaron costas.


#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **REVOCA** los autos proferidos el 29 de abril de 2021 y el



19 de octubre de 2022 de procedencia conocida, a partir de los cuales se dio por no contestada la demanda de Redetrans S.A. en liquidación judicial, y se ordenó el decreto de una medida cautelar, para en su lugar, por un lado, disponer que el escrito de respuesta sea incluido en la foliatura para su valoración y estudio y por el otro, sea denegada la medida cautelar de reserva pedida. Sin costas.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 226 fijados el 15 de diciembre de 2022  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.